

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección : 001
CASTILLA-LEON
C/ ANGUSTIAS S/N
55820

ILTRE. COLEGIO DE PROCURADORES
DE LOS TRIBUNALES DE VALLADOLID

01 MAR 2006

Número de Identificación Único: 471182/2001

Procedimiento:
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001182 /2001

Sobre AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

De D/ña. CONSEJO GRAL COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TECNICOS INDUSTRIALES
Representante: FERNANDO VELASCO NIETO

Contra D/ña. CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA -JUNTA DE
CASTILLA Y LEON-
Representante:

SENTENCIA nº 312

ILMOS SRS.: / En Valladolid a 10 de febrero de 2006

DON JESUS BARTOLOME REINO MARTINEZ

DON SANTOS HONORIO DE CASTRO GARCIA

DON FELIPE FRESNEDA PLAZA

VISTO por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el recurso contencioso-administrativo nº. 1182/2001, interpuesto por el Procurador Sr. Velasco Nieto, en representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, siendo parte demandada la Junta de Castilla y León, representada y defendida por Letrado de sus Servicios Jurídicos, impugnándose la Orden de la Consejería de Agricultura Ganadería de 3 de mayo de 2001 sobre regulación y convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de alimentación en Castilla y León, y habiéndose seguido el procedimiento jurisdiccional ordinario previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1.998.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo contra resolución expresada en el encabezamiento.

SEGUNDO. Reclamado el expediente administrativo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1.998, y una vez que fue remitido este, se dió traslado a la parte recurrente para que formulara la demanda, lo que hizo en término legal, efectuando las alegaciones que se expresan en la fundamentación jurídica de esta resolución.

TERCERO. La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda, alegando la legalidad del acuerdo recurrido.

CUARTO. Por las partes no se solicitó el recibimiento del juicio a prueba ni se formuló escrito de conclusiones quedando el procedimiento concluso, quedando pendiente de señalamiento para votación y fallo.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Fresneda Plaza

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la impugnación de la Orden de la Consejería de Agricultura Ganadería de 3 de mayo de 2001 sobre regulación y convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de alimentación en Castilla y León,

Las alegaciones de los recurrentes en relación con la orden impugnada no se ajusta a derecho en su artículo 7.4, artículo 41.1.b y anexo B, apartado b), en cuanto exigen la formulación del proyecto por técnico competente en materia de industrias agrarias y alimentarias o en industrias forestales, entendiéndose que los ingenieros técnicos industriales son competentes para la formulación de los proyectos a que se refiere la Orden.

Frente a los argumentos de los actores se opone la Administración demandada entendiéndose que conforme a la especialidad propia de cada titulación son competentes los ingenieros técnicos agrícolas o forestales

SEGUNDO. El artículo 7.4 establece:

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

"4.- Respecto a las solicitudes tramitadas a través de las líneas 1, 2 y 3, cuando sea preceptivo para la inscripción en el Registro de Industrias Agrarias de las inversiones objeto del expediente, deberá aportarse anteproyecto o proyecto redactado por técnico competente en materia de industrias agrarias y alimentarias y sus procesos de producción, o en industrias forestales y sus procesos de producción cuando el solicitante sea una industria silvícola. El anteproyecto o proyecto estará visado por el Colegio Oficial correspondiente y deberá desarrollar, al menos, 1 o s puntos y fichas que se relacionan en el Anexo B de la presente Orden, respetando las formas de presentación que allí se indican".

El artículo 41 reitera el contenido del anterior precepto respecto a la denominada línea 4, proyectos I +D. y El apartado b) del anexo B), respecto a los requisitos del proyecto, reitera el contenido del artículo anteriormente citado.

TERCERO. A tenor del planteamiento antes efectuado lo que ha de analizarse es si los ingenieros técnicos industriales son competentes para la formulación de los proyectos a que se refiere la Orden de la Consejería de Agricultura Ganadería de 3 de mayo de 2001 y si los preceptos impugnados de dicha orden impiden la formulación por dichos técnicos de proyectos.

En relación con la primera cuestión ha de partirse de que la Orden impugnada se está refiriendo a la formulación de proyectos de carácter industrial, referido a un ámbito material cual es el objeto de lo que se regula en la orden "transformación y comercialización de productos agrarios". En relación con tales proyectos se establecen cuatro líneas de ayuda, cada una de las cuales es objeto de desarrollo en la propia disposición impugnada. En gran medida se trata de la implantación de procesos de industrialización, como se deduce del artículo 5 respecto a los beneficiarios de las ayudas, artículos 13 y 25 que se refiere a procesos de transformación, artículos 30 y siguientes. Asimismo el anexo B cuando regula el contenido de los proyectos a formular se está refiriendo a instalaciones de carácter industrial, y así el apartado 1.10 se refiere específicamente a instalaciones industriales.

Acotado el tema de lo que es objeto de la proyección prevista en la Orden impugnada, de contenido claramente industrial, si bien referido materialmente a productos agrarios, silvícolas o de alimentación -lo que no le priva de tal carácter industrial-, no puede dudarse de que en abstracto los ingenieros técnicos industriales son competentes para la formulación de proyectos de tales caracteres, pues así dimana del artículo 1.1 de la Ley 12/1986, que les atribuye plena competencia en relación con su especialidad, regulándose tales especialidades en el Decreto 148/1969, de 13 de febrero, por el que se regulan las denominaciones de los graduados en

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Escuelas Técnicas y las especialidades a cursar en las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería Técnica que son las siguientes: mecánica, eléctrica, química industrial y textil, con el contenido, cada una de ellas, que consta en el artículo 3.4 del citado Decreto. Ello sin perjuicio de que deba estarse también a un criterio jerárquico en relación con los ingenieros industriales, en función de la entidad del proyecto o actuación, que corresponde diseñar o fiscalizar por el técnico, de forma que los de mayor entidad deben realizarse por los superiores, cuestión esta cuyo análisis desborda el ámbito de la presente sentencia, y a lo que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2003.

Pues bien, no existe duda de que los proyectos previstos en la orden objeto de impugnación tienen naturaleza industrial y como tales son susceptibles de ser realizados por ingenieros técnicos industriales dentro de su respectiva especialidad para lo que resultan habilitados por la titulación que poseen. El ámbito de su capacidad de proyección ha de ser así el que resulta del citado Decreto 148/1969, de 13 de febrero, cuyo artículo 3.5 se refiere al ámbito de las distintas especialidades de Ingeniería Técnica Industrial, con la siguiente redacción:

"a) Especialidad: Mecánica.- La relativa a la fabricación y ensayo de máquinas, la ejecución de estructuras y construcciones industriales, sus montajes, instalaciones y utilización, así como a procesos metalúrgicos y su utilización.

Las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial podrán facilitar, según los casos y mediante asignaturas optativas, una mayor especialización en los aspectos de Construcción de Maquinaria, de Estructura e Instalaciones industriales, o de Metalurgia.

b) Especialidad: Eléctrica.- La relativa a la fabricación y ensayo de máquinas eléctricas, centrales eléctricas, líneas de transporte y redes de distribución, dispositivos de automatismo mando, regulación y control electromagnético y electrónico para sus aplicaciones industriales, así como los montajes, instalaciones y utilización respectivos.

Las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial podrán facilitar, según los casos y mediante asignaturas optativas, una mayor especialización en los aspectos de Máquinas eléctricas Centrales y líneas eléctricas, o de Electrónica industrial.

c) Especialidad: Química industrial.- La relativa a instalaciones y procesos químicos y a su montaje y utilización".

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Existe por lo tanto una habilitación legal para la redacción "in genere" de proyectos como los que son analizados en la Orden impugnada.

CUARTO. No cabe duda, por lo tanto, de que en abstracto los ingenieros técnicos industriales pueden formular proyectos como los analizados, sin perjuicio de que deba analizarse su competencia técnica en relación con cada concreto proyecto, de donde podrá deducirse si en tal supuesto específico se encuentran habilitados o no legalmente para su formulación, o si por la materia de que se trata corresponde tal proyección a otro técnico, como pudieran ser los ingenieros agrícolas o forestales, supuesto que se tratase de una instalación predominantemente agrícola o forestal objeto de su específica especialidad.

Mas los preceptos impugnados al referirse a "técnico competente en materia de industrias agrarias y alimentarias y sus procesos de producción, o en industrias forestales y sus procesos de producción cuando el solicitante sea una industria silvícola", no admite una interpretación que permita la intervención de los reiterados ingenieros técnicos industriales, en cuanto que se esta en todo caso refiriendo a otros profesionales, lo que veta la intervención de los referidos ingenieros.

Por ello han de anularse tales preceptos, debiendo hacerse exclusivamente referencia a proyecto formulado por técnico competente, lo que permitirá analizar en cada caso concreto si este es el industrial u otro con específica competencia agraria o forestal, no pudiéndose determinar apriorísticamente en la norma la titulación requerida, ya que ello dependerá de los caracteres y entidad del proyecto objeto de formulación.

A análoga solución se llegó en la sentencia de este Tribunal de 28 de septiembre de 2000, recaída en el recurso 455 de 2.000, la cual se expresó en lo términos siguientes: "Del examen de estos pronunciamientos y como principio general cabe sostener que un Ingeniero Técnico Industrial tiene competencia, en principio, para redactar un proyecto de industria agraria o forestal; sin perjuicio que ante un proyecto concreto debe prevalecer la especialidad más próxima, entendido ésto como la inherente a la capacidad profesional que acredite la concreta titulación. Por tanto y en la medida que apriorísticamente los artículos 16.1, 2º y 24.1º.b) de la orden autonómica recurrida excluyen la intervención de aquellos profesionales vulneran aquella doctrina jurisprudencial y están incurso en la invalidez del artículo 63.1 de la Ley de Régimen y Procedimental 30/1992"

QUINTO. A tenor de lo razonado es procedente la estimación parcial de la demanda anulando los preceptos

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

infringidos de los que deberá desaparecer la expresión "en materia de industrias agrarias y alimentarias y sus procesos de producción, o en industrias forestales y sus procesos de producción cuando el solicitante sea una industria silvícola", debiendo limitarse a expresar "técnico competente".

No cabe, por contra, acceder en su integridad a la pretensión de reconocimiento de que son técnicos competentes los ingenieros técnicos industriales en relación con los proyectos previstos en la Orden, ya que ello estará en función del concreto proyecto de que se trate, sin que pueda "a priori" ser definido, pues, como se ha dicho, ello dependerá de la entidad y naturaleza de la obra proyectada.

SEXTO. En cuanto a las costas, no se aprecian mala fe o temeridad para su imposición a alguna de las partes, de conformidad con el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en reguladora de esta Jurisdicción.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O :

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de la parte actora, contra la Orden de la Consejería de Agricultura Ganadería de 3 de mayo de 2001, anulando la redacción dada a los artículos 7.4, artículo 41.1.b y anexo B, apartado b), de los que deberá desaparecer la expresión "en materia de industrias agrarias y alimentarias y sus procesos de producción, o en industrias forestales y sus procesos de producción cuando el solicitante sea una industria silvícola". Todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, debiendo procederse a la publicación de esta sentencia en el Boletín Oficial de Castilla y León, una vez firme de conformidad con el artículo 72.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Iltmo Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del